Bogotá D.C., julio 31 de 2019

Doctor:

**JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO**

Secretario General

Cámara de Representantes

Ciudad

**REF:** Proyecto de Ley *“Por la cual se dictan normas para fortalecer la resocialización de los reclusos en Colombia y se dictan otras disposiciones”*

Respetado doctor:

En nuestra condición de Representantes a la Cámara y en uso del derecho que consagra el artículo 154 de la Constitución Política y los artículos 139 y 140 de la Ley 5ª. de 1992 y art. 13 de la Ley 974 de 2005, nos permitimos presentar a consideración del Honorable Congreso, el presente proyecto de Ley ” Por medio de la cual se reforma el Régimen Penitenciario y Carcelario a efectos de lograr su humanización y cumplir con el fin de la pena,con su respectiva exposición de motivos.

Cordialmente,

**MARGARITA MARIA RESTREPO JULIO CESAR TRIANA QUINTERO**

**Representante a la Cámara Representante a la Cámara**

**Departamento de Antioquia Departamento del Huila**

**JOSE ELIECER SALAZAR LÓPEZ DAVID ERNESTO PULIDO NOVOA**

**Representante a la Cámara Representante a la Cámara**

**Departamento del Cesar Departamento del Guaviare**

**PROYECTO DE LEY No. \_\_\_\_\_ DE 2019 CAMARA**

“*Por la cual se dictan normas para fortalecer la resocialización de los reclusos en Colombia y se dictan otras disposiciones*”

**EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**DECRETA**

**CAPITULO I**

**GENERALIDADES**

**ARTÍCULO 1.** **Objeto**. El objeto de la presente ley es autorizar al Gobierno Nacional para crear las Fábricas Penitenciarias y las Penitenciarías Agropecuarias como establecimientos de reclusión, fortalecer la resocialización, reducir la reincidencia criminal, el hacinamiento carcelario y el costo de sostenimiento por recluso en el establecimiento penitenciario.

**ARTÍCULO 2.** **Ámbito de aplicación.**Las disposiciones de esta Ley aplican a todas las entidades estatales, sociedades de economía mixta y servidores públicos que tengan relación directa con los establecimientos de reclusión y personas naturales o jurídicas de carácter privado que puedan ejercer sus funciones en establecimientos de reclusión.

**ARTÍCULO 3.** **Principios.** Los principios de la presente Ley se regirán por la Constitución, la Ley y los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por Colombia.  Tendrá como principios fundamentales la reinserción social y la dignidad humana, con el fin de fortalecer y mejorar las condiciones penitenciarias de los condenados.

**CAPITULO II**

**FÁBRICAS PENITENCIARIAS Y PENITENCIARIAS AGROPECUARIAS**

**ARTÍCULO 4. Fabricas penitenciarias.**Se entiende como Fábrica Penitenciaria el espacio penitenciario que comprende la planta física del respectivo centro de reclusión y terrenos circundantes demarcados, que actuará como  [organización](http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n)  o [industria](http://es.wikipedia.org/wiki/Industria), dedicada a actividades económicas o comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes o [servicios](http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios) de los demandantes, producirán y prestarán sus servicios en ellas quienes estén cumpliendo las penas de los delitos descritos en la presente ley.

Para este tipo de establecimientos podrán ser destinados los bienes inmuebles urbanos o rurales que les hayan extinguido su derecho dominio o terrenos baldíos o los bienes inmuebles adquiridos o construidos mediante las alianzas público privadas.

Para asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial, previa aprobación del INPEC, USPEC y el Ministerio de Justicia y del derecho, se implementarán las alianzas público privadas para crearlas, organizarlas y administrarlas.

**ARTÍCULO 5.** **Penitenciaría Agropecuaria.** Se entiende como Penitenciaría Agropecuaria el espacio penitenciario que comprende la planta física del respectivo centro de reclusión y terrenos circundantes demarcados, que actuará como  [organización](http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n)  o [industria](http://es.wikipedia.org/wiki/Industria), dedicada a actividades agropecuarias, para satisfacer las necesidades de bienes o [servicios](http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios) de los demandantes, producirán y prestarán sus servicios en ellas quienes estén cumpliendo las penas de los delitos descritos en la presente ley.

Para este tipo de establecimientos podrán ser destinados los bienes inmuebles urbanos o rurales que les hayan extinguido su derecho dominio o terrenos baldíos o los bienes inmuebles adquiridos o construidos mediante las alianzas público privadas.

Para asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial, previa aprobación del INPEC y el Ministerio de Justicia y del derecho, se implementarán las alianzas público privadas para crearlas, organizarlas y administrarlas.

**ARTÍCULO 6. Condenados excluidos de establecimientos de reclusión Fábrica Penitenciaria y Penitenciarías Agrícolas**. Serán excluidas de las fábricas penitenciarias y las Penitenciarías Agrícolas aquellas personas condenadas por los delitos de feminicidio, feminicidio agravado, delitos contra menores de 18 años de edad y los delitos señalados en el artículo 68A del Código Penal.

**PARAGRAFO 1**. Quién incumpliere los reglamentos o normas sobre establecimientos de reclusión nacionales, o incurra en faltas o mal comportamiento en las Fábricas Penitenciarias y las Penitenciarías Agropecuarias, perderá los derechos que esta Ley otorga y el Gobierno nacional reglamentara la materia.

**PARAGRAFO 2.** Para los delitos con penas privativas de la libertad más gravosas, podrán acceder a estos establecimientos carcelarios los condenados que se encuentren en la fase de mínima seguridad o periodo abierto del sistema de tratamiento progresivo penitenciario.

**ARTÍCULO 7.**  Las Fábricas Penitenciarias y las Penitenciarías Agropecuarias contarán con grupos de profesionales interdisciplinarios para capacitar o ayudar a los internos y velarán por su continuidad en el programa y valorarán su desempeño personal y laboral.

**ARTÍCULO 8.**  Se autoriza al Gobierno Nacional a realizar Alianzas Público-Privadas (APP) como un instrumento de vinculación de capital privado para financiar la infraestructura necesaria para la creación, organización y administración de los servicios relacionados con las Fábricas Penitenciarias y las Penitenciarías Agropecuarias, salvo las funciones de seguridad, custodia y vigilancia en el Sistema Penitenciario y Carcelario.

La asunción de gastos de las Fábricas Penitenciarias y las Penitenciarías Agropecuarias de que trata la presente Ley estará a cargo del Estado Colombiano, el INPEC, USPEC o quien haga sus veces, el Ministerio de Justicia y del derecho y el privado, en proporciones que para tal efecto el Gobierno Colombiano determine.

**ARTÍCULO 9.**  Se autoriza al Gobierno Nacional para incentivar a las personas jurídicas o naturales de derecho privado a participar en las actividades comerciales de las Fábricas Penitenciarias y las Penitenciarías Agropecuarias mediante exenciones y beneficios tributarios en el impuesto a la renta y el IVA. El Gobierno Nacional reglamentara la materia dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la vigencia de la presente ley.

**ARTÍCULO 10.** El 10% de las ganancias adquiridas por las fábricas penitenciarias y Penitenciarías Agropecuarias de que trata la presente ley serán destinadas al fortalecimiento de los programas de violencia sexual, trabajo infantil, alta permanencia en la calle y consumo de sustancias psicoactivas (SPA), que hacen parte de los programas Especializados de los procesos Administrativo de Restablecimiento de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.

**ARTICULO 11.** **Remuneración.** La remuneración percibida por las personas privadas de la libertad en razón a los convenios de resocialización y trabajo penitenciario, no constituye salario y no tiene los efectos prestacionales derivados del mismo. El Ministerio del Trabajo, en coordinación con el INPEC y el USPEC determinará anualmente el monto mínimo de la remuneración que se pagará a las personas privadas de la libertad por el trabajo penitenciario. Esta deberá ser actualizada anualmente con base en el incremento del Índice de Precios al Consumidor y asegurando que el trabajo de las personas privadas de la libertad sea remunerado de manera equitativa.

**ARTICULO 12.** **Riesgos Laborales.** En el marco de las alianzas público privadas, el USPEC deberá garantizar que dentro del convenio mismo se incluyan las obligaciones para la cancelación de las sumas que correspondan a la afiliación respectiva.

**ARTÍCULO 13. Servicio de Salud.** En el marco de las alianzas público privadas, el USPEC deberá garantizar que dentro del convenio mismo se incluyan las obligaciones para la cancelación de las sumas que correspondan a la afiliación respectiva. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

**ARTÍCULO 14.Prohibición del trabajo forzado**. Se prohíbe el trabajo forzado en todas sus modalidades. Las personas privadas de la libertad deberán ejecutar sus actividades laborales en condiciones dignas. Está proscrita cualquier forma de explotación de las personas privadas de la libertad.

**ARTÍCULO 15.Jornada Laboral**. La jornada laboral para las personas privadas de la libertad no podrá, bajo ninguna circunstancia, superar las ocho (8) horas diarias y las cuarenta y ocho (48) horas semanales.

Se podrán establecer turnos especiales, cuando sea necesario y en ningún caso superarán las cuarenta y ocho (48) horas semanales.

**ARTICULO 16**. **Supervisión de las condiciones de trabajo.** El Ministerio del Trabajo realizará visitas periódicas a las Fábricas Penitenciarias y Penitenciarías Agropecuarias con el fin de determinar el cumplimiento de las normas en seguridad industrial y salud en el trabajo en las áreas destinadas al trabajo penitenciario.

**ARTÍCULO 17.** La distribución del apoyo de sostenimiento o reconocimiento del recluso se distribuirá de la siguiente manera, en orden de prioridad:

1. El resarcimiento a la víctima, cuando esta no haya sido reparada en su totalidad.
2. Ahorro programado para cuando cumpla la pena.
3. Libre destinación.

El Gobierno Nacional reglamentará la materia para su implementación.

**PARAGRAFO.** En aquellos casos en que el condenado termine el pago del resarcimiento a la víctima, el 60% del apoyo de sostenimiento se destinará al ahorro programado para cuando cumpla la pena, y el 40% será de libre destinación.

**ARTÍCULO 18.**  La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional ejercerá el control, inspección y vigilancia sobre las Fábricas Penitenciarias y las Penitenciarias Agropecuarias; el Gobierno Nacional Reglamentará su ejercicio.

**CAPITULO III**

**REDENCION Y BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA PENA**

**ARTÍCULO 19.** Modifíquese al artículo 82 de la Ley 65 de 1993”, el cual quedará así:

**ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO**. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.

A los detenidos y a los condenados se les abonará un (1) día de reclusión por dos (2) días de trabajo, salvo los condenados por los delitos de feminicidio, feminicidio agravado, delitos de homicidio o contra la libertad, integridad y formación sexuales de los menores de 18 años de edad y demás delitos señalados en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 por el cual se modificó el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000, a quienes se les abonará un (1) día de reclusión por tres (3) días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo.

**ARTÍCULO 20.** Modifíquese al artículo 60 de la Ley 1709 de 2014, el cual quedará así

**ARTÍCULO 60. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO.** El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un (1) día de reclusión por (2) dos días de estudio, salvo para los condenados por los delitos de feminicidio; feminicidio agravado; delitos de homicidio o contra la libertad, integridad y formación sexuales de los menores de 18 años de edad y demás delitos señalados en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 por el cual se modificó el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000, a quienes se les abonará un (1) día de reclusión por tres (3) días de estudio.

Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida.

**ARTÍCULO 21.** Modifíquese al artículo 90 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así

**ARTÍCULO 90. SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA "RENACIMIENTO" Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS.** Autorizase al Gobierno Nacional para constituir una sociedad de economía mixta que adoptará la denominación "Renacimiento" e implementar alianzas Público Privadas entre el IMPEC y particulares, cuyo objeto será la producción y comercialización de bienes y servicios fabricados en los centros de reclusión.

**ARTICULO 22**. Modifíquese al artículo 61 de la Ley 1709 de 2014, el cual quedará así

**ARTÍCULO 61. REDENCIÓN DE LA PENA POR ENSEÑANZA.** El condenado que acredite haber actuado como instructor de otros, en cursos de alfabetización o de enseñanza primaria, secundaria, artesanal, técnica y de educación superior y acredite las calidades necesarias, conforme al reglamento, tendrá derecho a que cada cuatro horas de enseñanza se le computen como un (1) día de estudio, salvo para los condenados por los delitos de feminicidio, feminicidio agravado, delitos de homicidio o contra la libertad, integridad y formación sexuales de los menores de 18 años de edad y demás delitos señalados en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 por el cual se modificó el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000, quienes tendrán derecho a que cada diez (10) horas de enseñanza no consecutivas, en días diferentes, se le computen como un día de estudio.

El instructor no podrá enseñar más de cuatro horas diarias, debidamente evaluadas, conforme al artículo 81 de la Ley 65 de 1993.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida.

**ARTÍCULO 23.** Modifíquese al artículo 147 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

**ARTÍCULO 147. PERMISO HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS.** La Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar en la fase de mediana seguridad.

2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta.

3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.

4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.

5. ***(Numeral 5 modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 25 de junio de 1999)*** Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados.

6. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina.

7. La persona condenada y privada de la libertad por los delitos de feminicidio, feminicidio agravado, delitos de homicidio o contra la libertad, integridad y formación sexuales de los menores de 18 años de edad y demás delitos señalados en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, por el cual se modificó el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000, no les aplicará este beneficio.

8. No ser reincidente o no tener más procesos penales en su contra por las mismas conductas punibles por las que fue condenado.

Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos o retardare su presentación al establecimiento sin justificación, se hará acreedor a la suspensión de dichos permisos hasta por seis meses; pero si reincide, cometiere un delito o una contravención especial de policía, se le cancelarán definitivamente los permisos de este género.

**PARAGRAFO**. El Juez de Ejecución de Penas deberá analizar de fondo los antecedentes penales del condenado y emitir concepto previo favorable sobre los anteriores requisitos y determinar su peligrosidad a efectos de conceder el permiso.

**ARTÍCULO 24.** Modifíquese al artículo 3 de la Ley 415 de 1997, el cual quedará así:

**ARTÍCULO 3°. PERMISO DE SALIDA.**El Director Regional del INPEC podrá conceder permisos de salida sin vigilancia durante quince (15) días continuos y sin que exceda de sesenta (60) días al año, al condenado, que le sea negado el beneficio de libertad condicional, previo concepto positivo emitido por el Juez de Ejecución de Penas, siempre que estén dados los siguientes requisitos:

1. Haber observado buena conducta en el centro de reclusión de acuerdo con la certificación que para el efecto expida el Consejo de Disciplina respectivo, o quien haga sus veces.

2. Haber cumplido al menos las cuatro quintas partes (4/5) de la condena.

3. No tener orden de captura vigente. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que le asista al funcionario judicial, se entenderá que el condenado carece de órdenes de captura, únicamente para efectos de este beneficio, si transcurridos 30 días de haberse radicado la solicitud de información ante las autoridades competentes, no se ha obtenido su respuesta.

4. No registrar fuga ni intento de ella durante el desarrollo del proceso o la ejecución de la sentencia.

5. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante el período que lleva de reclusión.

7. La persona condenada y privada de la libertad por los delitos de feminicidio, feminicidio agravado, homicidio o delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de los menores de 18 años de edad y demás delitos señalados en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, por el cual se modificó el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000, no les aplicará este beneficio.

8. No ser reincidente o no tener más procesos penales en su contra por las mismas conductas punibles por las que fue condenado**.**

El condenado que observare mala conducta en uso del permiso a que se refiere la presente disposición o retardare su presentación al establecimiento carcelario sin justa causa, no podrá hacerse merecedor a este beneficio durante los seis (6) meses siguientes, o definitivamente si incurre en otro delito o contravención especial de Policía.

**ARTICULO 25. Vigencia.** La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga a la Ley 105 de 1992 y demás disposiciones que le sean contrarias.

**MARGARITA MARIA RESTREPO JULIO CESAR TRIANA QUINTERO**

**Representante a la Cámara Representante a la Cámara**

**Departamento de Antioquia Departamento del Huila**

**JOSE ELIECER SALAZAR LÓPEZ DAVID ERNESTO PULIDO NOVOA**

**Representante a la Cámara Representante a la Cámara**

**Departamento del Cesar Departamento del Guaviare**

Bogotá D.C., julio 31 de 2019

Doctor:

**JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO**

**Secretario General**

Cámara de Representantes

Congreso de la República

Presente

**REF:** Proyecto de Ley “*Por la cual se dictan normas para fortalecer la resocialización de los reclusos en Colombia y se dictan otras disposiciones”.*

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

1. **OBJETO**

El proyecto busca crear las fábricas penitenciarias y Penitenciarías agropecuarias para condenados por delitos de menor peligrosidad, mediante la implementación de alianzas público privadas, proporcionando condiciones favorables para la futura reinserción social del interno en las mejores condiciones posibles y con el debido respeto de las víctimas. Así mismo, se busca que los requisitos para las rebajas de la pena por vía de redención sean más rígidos para los delitos con las penas más graves en la sociedad y que dentro de los requisitos para conceder los beneficios administrativos como: Permisos de 72 horas y salida de 15 a 60 días se observe la naturaleza del hecho punible cometido, los antecedentes penales del condenado privado de la libertad para determinar si es reincidente.

## FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Los artículos 1º y 2º de la Constitución Nacional, así como 3º y 4º del Estatuto Represor, los preceptos normativos del Código Penitenciario y Carcelario, determinan que el fin primordial de la pena es la resocialización del condenado (art. 9 ley 65 de 1993), de lo que se sigue que el fin del tratamiento penitenciario consista en la resocialización del interno (art.142 ley 65 de 1993), objetivo para el cual se tienen como herramientas la evaluación de la personalidad y el proceso disciplinario del interno a través de una serie de actividades como el trabajo, el estudio, la enseñanza, la recreación (art. 10 ley 65 de 1993) y como plan metodológico un sistema progresivo de fases que va determinando la intensidad del tratamiento penitenciario, o, lo que es lo mismo, el calibre de la injerencia en la libertad del individuo condenado (art. 12 ley 65 de 1993).

La resocialización en el ordenamiento jurídico colombiano está cimentada en la propia Constitución Política, que introduce una serie de elementos indiscutibles que tienen que ser observados en cualquier proceso de resocialización. Esto es: la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes, en su Artículo 12, la prohibición de penas o medidas de seguridad imprescriptibles en su Artículo 28, el debido proceso en el en su Artículo 29 y el respeto de la dignidad humana en su Artículo 1. Por otra parte, la legislación penitenciaria, precisamente el Artículo 9 de la Ley 65 de 1993, establece que la pena tiene una función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Así mismo, el Artículo 10 de la misma disposición, afirma que la resocialización es la finalidad del tratamiento penitenciario mediante el examen de la personalidad del reo, a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario. Con relación a la finalidad del tratamiento penitenciario Feijoo (2014) comenta que la resocialización conlleva el otorgamiento de una especial relevancia a la idea de que la ejecución penal debe estar basada en el tratamiento, es por ello que la imposición de la pena privativa de libertad, no aparece como un mal, pues el tratamiento se convierte en un bien o en una mejora para el delincuente y para la sociedad. (p. 152).

Recapitulando, también se encuentra ampliamente respaldada esta posición, mediante acuerdos internacionales que insisten en la resocialización como función primordial de las sanciones penales, entre ellos, se destaca el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1996, el cual expresa en su Artículo 11 que el “régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados”. De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (aprobada mediante la Ley 16 de 1972), señala en su Artículo 5 que las “penas privativas de la libertad, tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados”, destacando además, en el Artículo 27 de la misma Convención, que el derecho a la integridad personal regulado por su Artículo 5, no puede suspenderse, ni siquiera en caso de guerra, peligro público u otra emergencia. Es importante destacar, que las mencionadas disposiciones integran el Bloque de Constitucionalidad colombiano por remisión del inciso segundo del Artículo 93 de la Constitución Política, y por lo tanto, cuentan con un carácter superior o supralegal.

La Ley 65 de 1993 y particularmente en lo referente al tratamiento penitenciario no ha sufrido cambios ante los movimientos sociales que han determinado nuevos comportamiento de la comunidad, el tratamiento se viene aplicando bajo los mismos parámetros que fueron establecidos en la Ley 65 de 1993 complementada por las Leyes 415 de 1997 y 504 de 1999, la Ley 750 de 2002, que consagran la prisión domiciliaria y el trabajo comunitario para la “mujer”, el Decreto 2636 de 2004 que subrogó el artículo 298 de la Ley 65 de 1993, estableciendo la seguridad electrónica como pena sustitutiva de prisión; mecanismo regulado en la Ley 1709 de 2014, sin que se hubiese dispuesto modificación alguna al tratamiento penitenciario y al sistema progresivo como medio para el cumplimiento de la pena.

1. **EL SISTEMA PENITENCIARIO EN COLOMBIA**

El Código Penitenciario y Carcelario colombiano (Ley 65 de 1993), señala como objetivo del tratamiento penitenciario el de preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad y éste se realiza conforme a la dignidad humana, las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto y se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa, deportiva y las relaciones de familia, será progresivo, programado e individualizado hasta donde sea posible.

Así mismo, el artículo 4º del Código Penal, dentro de las funciones de la pena señala que “La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión.”

Bajo esta lógica, la pena impuesta debe servir para proteger los bienes jurídicos de los asociados por dos vías: En principio, aleja de su seno aquella persona que venía perjudicando a la sociedad con su actuar antijurídico –prevención especial-, y, al tiempo, la somete a un tratamiento disciplinario que le haga reflexionar sobre esta clase de comportamientos, garantizando que una vez cese la pena el condenado no insista en su conducta dañina –resocialización.

Ahora bien, El tratamiento penitenciario consagrado en la Ley 65 de 1993 es el denominado “Sistema Progresivo”, este sistema tuvo su origen en España con el Capitán Montesinos, seguido de Inglaterra y Bélgica, después de la primera guerra mundial, este modelo se fue generalizando en casi la mayoría de los reglamentos Penitenciarios de Europa. Este modelo se caracterizó por propender por un programa de asistencia al delincuente, para lo cual fusionaba distintos sistemas, pasando de los más duros a los más suaves, de forma tal que se lograra reincorporar al reo estigmatizado al proceso productivo y a la sociedad civil, disminuyendo así la dureza de la pena y respetando más la dignidad de los sancionados.

Este sistema se basa en la distribución del tiempo de la condena en periodos y en cada uno de ellos se incrementan los beneficios de los reclusos de conformidad con su conducta en su lugar de reclusión y sus actividades dentro del programa de tratamiento del cual es objeto; el sistema trae dos metas: Una es la disciplina del recluso y su adhesión al régimen penitenciario y la otra es que a través del régimen se obtenga la reforma moral del penado y su preparación para la futura vida en libertad.

Con este sistema se fortalece la observancia de los valores humanos, tendientes a la reincorporación social en forma útil, lícita y productiva. La progresividad es un sistema del penitenciarismo que debe usarse acorde con nuestra realidad social, cultural, económica y política.

Este tratamiento se realiza por medio de grupos interdisciplinarios integrados por abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas y oficiales de prisiones, que actúan bajo la óptica de facilitadores o animadores, ellos determinan quienes requieren tratamiento después de la primera fase. Dentro del tratamiento penitenciario, se encuentran ciertos beneficios administrativos como los permisos, la libertad y las franquicias preparatorias, el trabajo extramural y la penitenciaria abierta. Dependen entonces de la fase de avance, la pena y el delito, la conducta, la participación en actividades laborales, educativas, culturales o deportivas y el cumplimiento con la reglamentación del respectivo beneficio y se verifica a través de programas educativos, laborales, de instructores, contando también con el apoyo de programas trasversales con la actividad cultural y recreativa.

A pesar que la ley establece que se les realice un diagnóstico para verificar sus condiciones de salud, es necesario evaluar el entorno social del interno y realizarles un tratamiento o seguimiento médico durante el cumplimiento de su pena en los sitios de reclusión.

El sistema de tratamiento progresivo está integrado por las siguientes fases:

1. **Observación, diagnóstico y clasificación del Interno**: Con la llegada del condenado al penal se inicia el tratamiento penitenciario, como primera medida se le practica un diagnóstico para verificar sus condiciones de salud (art. 61 ley 65 de 1993) y un examen que permita clasificarlo e ingresarlo en un patio donde conviva con gente de similar edad, género y necesidades de tratamiento penitenciario (arts. 63 y 144 ley 65 de 1993). Así mismo, desde este momento se abrirá una cartilla biográfica que contenga las evaluaciones morales y sociales realizadas al interno que permitan medir el progreso de su resocialización (art. 62 ley 65 de 1993). Esta etapa tendrá una duración mínima de un mes y máxima de tres meses (art. 10 de la Resolución Nº 7302 de 2005).
2. **Alta seguridad que comprende el periodo cerrado:** Luego de tales dictámenes, comienza el interno a descontar su pena en la primera fase de tratamiento denominada fase de alta seguridad, que comprende un periodo cerrado de la reclusión y en el que no se otorga al interno ningún beneficio. Desde este momento, el interno está obligado a realizar actividades de trabajo que vayan en pro de su resocialización (art. 79 ley 65 de 1993), igualmente, en esta y en las próximas dos fases de tratamiento, el ingreso a programas de educación será de carácter obligatorio (art. 144 ley 65 de 1993). Como se dijo anteriormente, la fase comentada no incorpora ningún beneficio administrativo, únicamente le procede al interno el reconocimiento de su buen comportamiento, y la correcta realización de actividades artísticas, deportivas, de lectura, trabajo, estudio, recreación o enseñanza que apoyan su proceso de resocialización, con la purga adicional de un día de pena por cada día de labor (arts. 82, 97,98 y 99, ley 65 de 1993).
3. **Mediana seguridad que comprende el periodo semiabierto**: Habiéndose cumplido la tercera parte de la pena, el interno que logre acreditar que se encuentra objetiva y subjetivamente preparado para afrontar una fase de menor restricción de su libertad, será promovido a fase de mediana seguridad por el Concejo de Evaluación y Tratamiento, entre los ítems necesarios para la promoción del interno se encuentran el haber tenido una buena actitud y el desarrollo de las precitadas actividades para redención con un rendimiento efectivo (art. 10 Resolución Nº 7302 de 2005). El interno que haya ingresado a fase de mediana seguridad recibirá un tratamiento penitenciario semiabierto, por lo que, de cumplir los requisitos legales, podrá empezar a gozar del beneficio administrativo de poder salir del penitenciario, sin vigilancia, por un lapso de hasta 72 horas (art. 147 ley 65 de 1993). Dicho beneficio será otorgado, previo visto bueno por parte de la autoridad judicial competente, a quien, entre otras cosas, demuestre su buen comportamiento, la ausencia de faltas disciplinarias y la realización de actividades tendientes a la redención de pena.
4. **Mínima seguridad o periodo abierto:** Vencidas las cuatro quintas partes (4/5) del tiempo requerido para acceder al mecanismo suspensivo de la libertad condicional, el condenado que, entre otros requisitos, haya continuado con su buena conducta y desempeñado con buena calificación las actividades tendientes a su redención, será ubicado en fase de mínima seguridad y el tratamiento de su pena será abierto (art.10 de la Resolución Nº 7302 de 2005). Durante esta fase el penado podrá acceder al permiso administrativo de salida del establecimiento, sin vigilancia, por un interregno de hasta 15 días, siempre y cuando demuestre, entre otras cosas, haber registrado un buen comportamiento en el penal y desarrollado las multicitadas actividades tendientes a la redención de pena (art. 147A ley 65 de 1993). Si por alguna circunstancia le fuera negada la libertad condicional, el penado que acredite requisitos idénticos a los propuestos para otorgar la gracia recién mencionada, podrá acceder, así mismo, al permiso administrativo de fines de semana regulado por el artículo (art. 147 B ley 65 de 1993).
5. **Fase de confianza que coincidirá con la libertad condicional:** Cuando el interno haya cumplido el tiempo de pena necesario para el otorgamiento de la libertad condicional y, sin embargo, ésta le sea negada, el interno podrá ser promovido a la fase de confianza. Para ello el condenado deberá demostrar, entre otros requisitos, que ha tenido un tratamiento penitenciario positivo (art. 10 de la Resolución Nº 7302 de 2005). El interno que alcance esta fase podrá gozar del beneficio de libertad preparatoria, que consiste en permitirle abandonar el penal durante el día para que desarrolle actividades laborales o de estudio previamente acreditadas y regrese al penal para pasar la noche y los fines de semana (art. 148 ley 65 de 1993). Dentro de la valoración realizada de cara al otorgamiento del mentado beneficio, se tendrá en cuenta la vocación del interno hacia las actividades de trabajo y estudio, igualmente, su buen comportamiento. Al observar el buen uso que el interno le dé al comentado beneficio, se le otorgará otro denominado, franquicia preparatoria, para que continúe sus actividades laborales o de estudio y únicamente tenga que reportarse periódicamente ante el director del establecimiento penitenciario (art.149 Ley 65 de 1993).
6. **SOBRE EL HACINAMIENTO CARCELARIO**

La problemática del hacinamiento carcelario en Colombia es un tema prevalente pues el incremento de la población reclusa en los últimos años, sin el correspondiente aumento de la capacidad carcelaria, ha hecho que el hacinamiento en el 2019 se encuentre en el 48%.

Según el informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para enero de 2019 a nivel nacional, Colombia presentaba una población reclusa de 187.477 personas, donde 118.769 de estas eran de población intramural. Esta población esta distribuida en alrededor de 133 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) que generan lugar para apenas 80.227 reclusos. Estos cupos dejan a 38.542 internos en situación de hacinamiento, es decir, la infraestructura penitenciaria y carcelaria presenta un índice de hacinamiento del 48%.

39.515 personas de la población intramural se encuentran como sindicados, lo que equivale a más del 30% de la población intramural total y 79.254 como condenados.

El índice de hacinamiento presentado por en el INPEC en este informe se ve aunado a los altos índices de reincidencia de la población condenada, donde más del 18% de los internos, 21.151 condenados, recaen en la conductas criminales después de culminadas sus penas.

De igual manera cabe resaltar que tan solo el 52,8% de la población a cargo del INPEC, se encuentran realizando actividades intramurales, lo que disminuye la efectividad de los procesos de resocialización.

Para 2013 se destinaban del presupuesto del INPEC alrededor de $5.425.000 por interno al año para sostenimiento, en materia de seguridad y vigilancia. Estos recursos se invierten tanto en condenados como sindicados, adicionando un valor de $3.343.000 por interno al año por servicios corrientes que incluyen salud y alimentación, es decir, $12.051.000 por preso al año.

El sistema penitenciario necesita satisfacer las necesidades a largo plazo de la población intramural, ajustarse a los recursos limitados, reducir el costo de la prestación de servicios, mejorar la calidad de los servicios y así ponerle un alto a las violaciones de derechos humanos que ocasiona el hacinamiento en las penitenciarías y cárceles en Colombia.

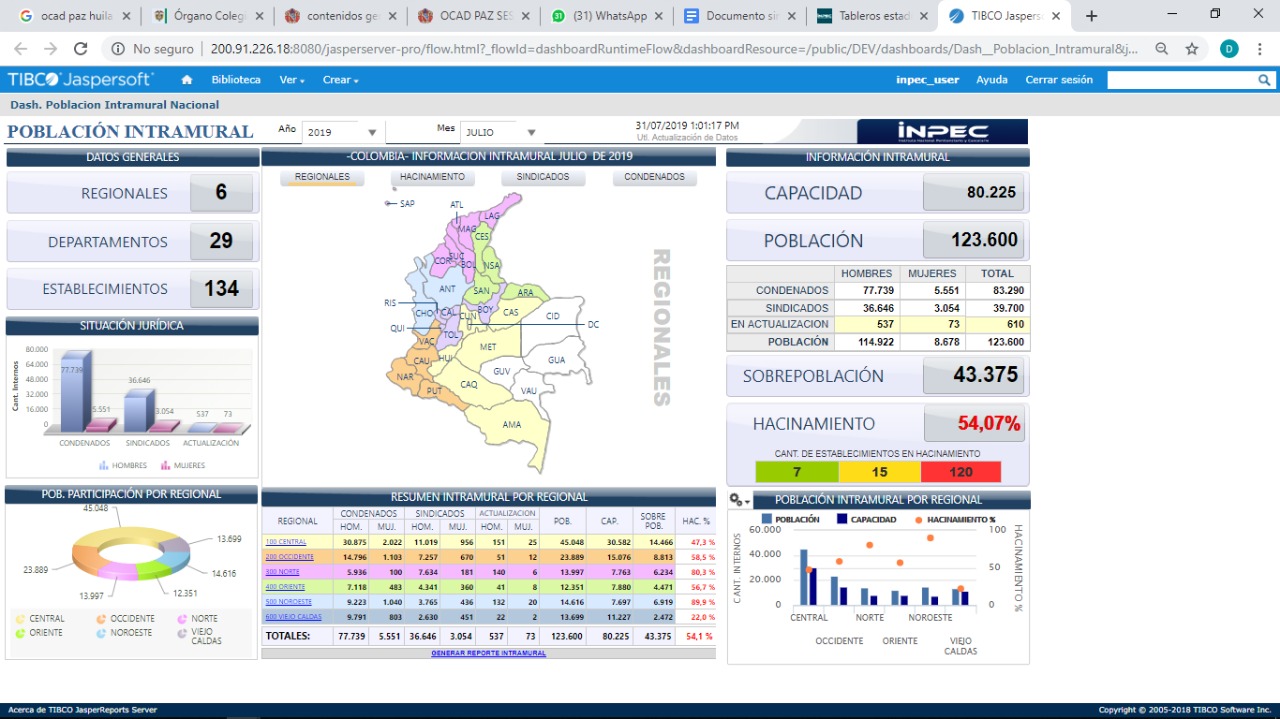


Imagen 1. Estadísticas de la población intramural en Colombia. (INPEC, 2019)

1. **DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA**

En Colombia los internos tienen derecho a realizar actividades tendientes a su resocialización, el reconocimiento de una rebaja o redención de pena como contraprestación a tal esfuerzo, es un derecho del condenado que es exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella y así abonar parte de la pena por esta vía.

La Honorable Corte Constitucional Colombiana, sustenta que la redención de la pena es la “*única fuente de materialización de la resocialización del penado que accede al descuento de días de prisión física por realizar determinadas actividades, entre ellas, el estudio y el trabajo*”. Sentencia de noviembre 24 de 2015. Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. (Sentencia número T-718)

En Colombia, la Ley 1709 de 2014 en su artículo 64, incluyó en la ley 65 de 1993, actual código penitenciario y carcelario, el artículo 103 A, que establece: *“Derecho a la redención. La redención de pena es un derecho que será exigible, una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes”.*

El Código Penitenciario y Carcelario, señala diversas formas de redimir la pena para las personas privadas de la libertad, las cuales pueden ser a través de actividades como el trabajo penitenciario (Art. 79), la educación o estudio por parte del interno (Art. 94), la enseñanza (Art. 98) y otras actividades como las literarias, deportivas, artísticas y comité de internos (Art. 99).

El artículo 82 del mismo estatuto, estipulo la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de la libertad, mediante el cual se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo, no pudiéndose computar más de ocho horas de trabajo.

El artículo 97 estipula la redención de pena por estudio *(Artículo modificado por el artículo 60 de la* [*Ley 1709 de 2014*](file:///C:\Users\angelica.vargas\AppData\Roaming\Microsoft\Word\l_1709_14.doc#art60)***),*** a los condenados a pena privativa de la libertad, a quienes se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.

El artículo 98 señala la redención de la pena por enseñanza (Artículo modificado por el artículo [61](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1709_2014_pr001.html#61) de la Ley 1709 de 2014), los condenados que acrediten haber actuado como instructor de otros, en cursos de alfabetización o de enseñanza primaria, secundaria, artesanal, técnica y de educación superior tendrá derecho a que cada cuatro horas de enseñanza se le computen como un día de estudio, siempre y cuando haya acreditado las calidades necesarias de instructor o de educador, conforme al reglamento.

La redención de la pena es importante en la fase de la ejecución de la pena privativa de la libertad en un sistema que persigue la resocialización de los internos, mediante este instrumento los internos se motivan a tener un buen comportamiento durante su reclusión y se incentivan a trabajar, estudiar, enseñar o practicar actividades artísticas, deportivas, recreativas y de lectura, para recibir a cambio un abono de pena adicional, con el que pueden reducir el tiempo efectivo de privación de la libertad y tener la posibilidad de garantizar el purgamiento de la pena dentro de los límites de la dignidad humana.

La redención de la pena es un derecho que permite al sentenciado acortar el tiempo de permanencia en el establecimiento penitenciario mediante la acumulación de los días redimidos, que la permitirá alcanzar la libertad definitiva con anticipación a la fecha fijada para el cumplimiento de la condena u obtener los beneficios penitenciarios de prelibertad como la semi libertad y la liberación condicional con anticipación, de tal suerte que se convierte en un buen mecanismo coadyuvante al tratamiento del interno, toda vez que lo incentiva al trabajo o la educación y consolida estas dos acciones como pilares fundamentales de la rehabilitación, teniendo como soporte a la disciplina.

El condenado que no tenga acceso al trabajo, estudio o enseñanza, la cárcel se convierte en un lugar apto para el ocio improductivo, que en definitiva ratifica la idea de que el condenado al llegar allí, se gradúa con honores, dentro de un escena­rio catalogado como la *universidad del crimen* (Sampedro, 1998, p. 109), donde el que no sabe aprende y el que sabe aprende más.

El artículo 494 de la Ley 600 de 2000, prevé que la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza es concedida por el Juez de Ejecución de Penas conforme a las previsiones del Código Penitenciario y Carcelario.

El juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para conceder o negar la redención de la pena debe tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza. En esta evaluación se considerará la conducta del interno, cuando la evaluación es negativa, el juez se abstendrá de conceder dicha redención.

Finalmente, se hace necesario reformar la normatividad vigente en relación con aquellos condenados por delitos que representan cierta gravedad para la sociedad, como son los delitos de feminicidio, feminicidio agravado y demás delitos señalados en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 por el cual se modificó el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000,en el sentido de que los requisitos para la redención de la pena por trabajo, estudio, enseñanza sean más exigentes y rigurosos en las que se duplique el esfuerzo del interno para poder acceder a este derecho, buscando así una mejor resocialización para el condenado, logrando la aprehensión y perfeccionamiento de algún arte u oficio con más tiempo de dedicación, que le permita ocupar su mente por mayor tiempo y le permite devengar recursos por fuera de los muros de la cárcel, desarrollando una actividad legal que lo aleje de la comisión de delitos y así evitar que reincida al momento de salir del establecimiento de reclusión.

1. **BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS**

Los beneficios administrativos son mecanismos de política criminal del Estado, inherentes a la ejecución individual de la condena, que se relacionan con las fases del tratamiento penitenciario. En algunos casos pueden implicar la reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad dispuesto en la sentencia, o una modificación en las condiciones de ejecución de la condena.

El destinatario principal de los beneficios penitenciarios es el interno recluido en el lugar de ejecución de la condena, así como sus familiares, empero, la misma está igualmente dirigida al colectivo social, en la medida en que la sociedad es receptora del interno.

Los beneficios administrativos se encuentran desarrollados en el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) en sus Artículos 147 a 149, junto con algunas leyes modificatorias, entre los mismos se encuentran: permiso hasta de setenta y dos horas; permiso de salida por 15 días; permiso de salida por fines de semana; libertad preparatoria y franquicia preparatoria, el trabajo extramuros y penitenciaría abierta.

En el sistema penal colombiano es importante resaltar que en el proceso penal existe una distancia absoluta entre el juez de conocimiento, el juez de ejecución de penas y medidas de Seguridad y el recluso, hay tal ausencia de compenetración que se puede presentar una condena sin que se hayan cruzado palabra entre el Juzgador y el enjuiciado, pueden ser dos seres provenientes de diferentes culturas lo que implica visiones del mundo tan radicalmente diferenciadas que hace imposible que el primero entienda al segundo, así como que éste llegue a entender que ocurre a su alrededor y menos aún tiene acercamiento con el Juez de ejecución de Penas y medidas de Seguridad, lo que conlleva a que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conceda los beneficios administrativos sin conocer subjetivamente al condenado, con solo revisar los requisitos que exige la ley taxativamente para este tipo de beneficios.

La tarea de la ejecución de la pena reafirma la conveniencia de los diferentes subrogados o mecanismos alternativos a la pena de prisión, así como los beneficios administrativos o judiciales, conforme al grado positivo o negativo de disciplina o resocialización de cada interno; el sistema penitenciario es aquel conjunto de mecanismos utilizados, para motivar el disciplinamiento del interno, lo cual se viene a entender como su resocialización.

Así las cosas, es pertinente iterar que a medida que avanza el tratamiento penitenciario se busca aumentar el grado de disciplina del interno motivándolo con un sistema que le vaya otorgando mayores beneficios a su buen comportamiento. El sistema de disciplinamiento que es el sistema penitenciario, mengua gradualmente la reducción de la libertad del interno mientras éste se muestre dócil en su comportamiento y activo en el desarrollo de las actividades propuestas para su resocialización, haciendo que éste centre sus esfuerzos en alcanzar paulatinamente su libertad a través de las gracias liberatorias que se le van concediendo.

Sin embargo, el sistema de disciplinamiento comentado tiene una obligatoria contra cara, la que tiene que ver con la regulación del comportamiento de aquellos internos que no logran ajustar su disciplina a los requerimientos legales y que consiste en añadir consecuencias negativas al mal comportamiento de los internos, mas allá de lo dispuesto en el título XI del Código Penitenciario y Carcelario en referencia a las sanciones disciplinarias a los penados, lo que acá interesa mostrar es que la mayor privación que experimentan quienes tienen un mal comportamiento tiene que ver con el no poder gozar de los beneficios administrativos y judiciales que hacen que los internos retomen paso a paso su libertad. Así, mientras un interno disciplinado puede disfrutar de permisos de 3 o 15 días, de salidas por los fines de semana, de estudiar o trabajar por fuera del establecimiento, y pueden redimir pena para hacer más corta la purga física de la sentencia, el penado indisciplinado deberá permanecer en reclusión por el tiempo que se estime en la condena, sin la posibilidad de disfrutar ninguno de los beneficios administrativos y judiciales propios de la ejecución de la pena.

El Código Penitenciario y Carcelario señala que al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario le corresponde adelantar programas de servicio social en todos los establecimientos de reclusión dirigida a la población de sindicados, condenados y post penados para atender tanto sus necesidades dentro del centro como para facilitar las relaciones con la familia, supervisar el cumplimiento por parte del interno de las obligaciones contraídas en el tratamiento penitenciario y para apoyar a los liberados.

A continuación, analizaremos los beneficios administrativos que serán objeto de modificación, mediante el presente proyecto de Ley.

* **PERMISO POR 72 HORAS**

El permiso de hasta setenta y dos (72) horas, es un beneficio administrativo que hace parte del tratamiento penitenciario, regulado en el artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario, al referir que “la Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes requisitos:

-Estar en la fase de mediana seguridad (que comprende el período semiabierto).

-Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta.

-No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.

-No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.

-Si se trata de delitos con competencia de Jueces Penales del Circuito Especializados, haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta.

-Haber trabajado, enseñado o estudiado durante el tiempo de reclusión.

-Haberse observado buena conducta certificada por el Consejo de Disciplina del establecimiento carcelario correspondiente.

En la práctica, adicionalmente habrá de informarse el lugar exacto en el que se cumplirá el permiso.

Como se observa, dentro de los requisitos para acceder a este beneficio no se tiene en cuenta la gravedad del delito cometido, ni la peligrosidad del condenado, por cuanto pueden reincidir durante el tiempo que dure este beneficio, tal como se evidenció en días pasados, cuando a un condenado por homicidio en menor de edad, se le concedió este beneficio y durante este permiso asesinó a otra menor de edad.

Con el proyecto de ley se pretende aumentar los requisitos para acceder a estos beneficios, que no se trate de un “check list” de requisitos objetivos que se cumplan, sino que se hace necesario que el Juez de Ejecución de Penas analice de fondo la peligrosidad del condenado, la gravedad del delito por el cual se encuentra privado de la libertad y si existen o no otras investigaciones en curso o condenas penales contra el interno para así definir sobre la concesión de estos permisos.

* **PERMISO DE SALIDA SIN VIGILANCIA DURANTE 15 DIAS CONTINUOS Y SIN QUE EXCEDA DE 60 DIAS AL AÑO.**

Este beneficio fue adicionado por el artículo 3 de la Ley 415 de 1997, que señala: El Director Regional del Inpec podrá conceder permisos de salida sin vigilancia durante quince (15) días continuos y sin que exceda de sesenta (60) días al año, al condenado que le sea negado el beneficio de libertad condicional, siempre que estén dados los siguientes requisitos:

1. Haber observado buena conducta en el centro de reclusión de acuerdo con la certificación que para el efecto expida el Consejo de Disciplina respectivo, o quien haga sus veces.

2. Haber cumplido al menos las cuatro quintas partes (4/5) de la condena.

3. No tener orden de captura vigente. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que le asista al funcionario judicial, se entenderá que el condenado carece de órdenes de captura, únicamente para efectos de este beneficio, si transcurridos 30 días de haberse radicado la solicitud de información ante las autoridades competentes, no se ha obtenido su respuesta.

4. No registrar fuga ni intento de ella durante el desarrollo del proceso o la ejecución de la sentencia.

5. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante el período que lleva de reclusión.

El condenado que observare mala conducta en uso del permiso a que se refiere la presente disposición o retardare su presentación al establecimiento carcelario sin justa causa, no podrá hacerse merecedor a este beneficio durante los seis (6) meses siguientes, o definitivamente si incurre en otro delito o contravención especial de Policía.

Como se observa, dentro de los requisitos para acceder a este beneficio no se tiene en cuenta la gravedad del delito cometido, ni la peligrosidad del condenado por cuanto pueden reincidir durante el tiempo que dure este beneficio.

Con el proyecto de ley se pretende aumentar los requisitos para acceder a estos beneficios, que no se trate de un “check list” de requisitos objetivos que se cumplan, sino que se hace necesario que el Juez de Ejecución de Penas analice de fondo la peligrosidad del condenado, la gravedad del delito por el cual se encuentra privado de la libertad y si existen o no otras investigaciones en curso o condenas penales contra el interno para así definir sobre la concesión de estos permisos.

**ESTADISTICAS EN COLOMBIA SOBRE LOS BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS**

A continuación, se presentan algunos apartes de los resultados de una encuesta aplicada a los reclusos y reclusas del EPMSC de Neiva, que fue publicada por la revista Jurídica Piélagus No. 14 - Enero a Diciembre de 2015, páginas 151 y ss, en el artículo titulado *“Efectividad de los Beneficios Administrativos y Judiciales en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad*

*de Neiva entre los años 2012 a 2014*.”, así:

*“…la muestra está determinada por un total de 100 internos encuestados, los cuales se encontraban al momento de la investigación distribuidos de la siguiente manera dentro del Centro Carcelario:*

*Pabellón mujeres: 25 Internas,*

*Patio N°. 2: 27 internos,*

*Patio N°. 3: 25 internos,*

*Patio N°. 4: 23 internos.*

*Total de 100 encuestados.”*

Gráfica No. 1, permite observar “*cuáles beneficios administrativos son los más solicitados, se enseña que el 95% de los encuestados han solicitado permiso de hasta 72 horas y tan sólo el 5% ha pedido otro beneficio, el permiso de 15 días, esto en el caso de los hombres, pero realmente son inexistentes las solicitudes por otro beneficio administrativo como franquicia preparatoria, permiso de fines de semana, libertad preparatoria, que existen en el ordenamiento, pero que los reclusos no conocen*.”

**Grafica No. 1,** (Gráficaelaborada con base en la publicada en la revista Jurídica Piélagus No. 14 - Enero a Diciembre de 2015, páginas 151 y ss.)

La gráfica No. 2, permite observar los beneficios administrativo concedidos y negados.

*“Sigue siendo fundamental el tema de los beneficios administrativos, lastimosamente confundidos, desconocidos, y por ende no solicitados, o si se solicitan y no son concedidos, precisamente por desconocimiento de una norma tan fundamental para la relación de sujeción que tienen con el Estado, como lo es la Ley 65 de 1993, que determina todo lo que atañe al sistema penitenciario y carcelario y que no tiene una estrategia pública de divulgación, afectando fehacientemente los derechos y beneficios de la población carcelaria.*

*La anterior gráfica refleja que de cada 9 peticiones de permiso de hasta 72 horas, 6 están siendo negadas y tan sólo 3 se están concediendo. Lo que invita a reflexionar sobre lo que sucede al momento de su interposición y las razones de la negativa, aspecto que con alta probabilidad puede estar relacionado con el desconocimiento*.”

**Grafica No. 2** (Gráficaelaborada con base en la publicada en la revista Jurídica Piélagus No. 14 - Enero a Diciembre de 2015, páginas 151 y ss.)

La grafica No. 3, permite observar el balance de beneficios administrativos concedidos por año.

**Grafica No. 3** (Graficaelaborada con base en la publicada en la revista Jurídica Piélagus No. 14 - Enero a Diciembre de 2015, páginas 151 y ss.)

La gráfica 4, permite observar los motivos de la negación del beneficio solicitado. “*Tenemos: a). Modalidad de la conducta punible; b). No indemnización de la víctima; c). No es competencia de la autoridad a la que solicito; d). Falta de cumplimiento de requisitos; e). Falta de tratamiento penitenciario; f). Culpa del recluso; g). Desconoce las razones; h). Falta de legitimidad en la causa; i). Reincidencia.”*

**Gráfica No. 4** (Graficaelaborada con base en la publicada en la revista Jurídica Piélagus No. 14 - Enero a Diciembre de 2015, páginas 151 y ss.)

Así mismo, el artículo de la revista señala:

*“El motivo por el cual más se niegan las solicitudes de beneficios es indudablemente por la modalidad de la conducta, es decir, el delito por el cual se le había condenado estaba excluido de los que podían pedir algún beneficio; sin embargo, llama la atención que pese a que existen delitos que no están exentos, es recurrente por parte de los jueces, negarlos por un aspecto subjetivo, determinado por la modalidad de la conducta, configurada al momento de la comisión del delito. Este aspecto, que es el más reiterativo, se traduce en que el Juez, al momento de apreciar la concesión del beneficio, valora y estima nuevamente la conducta por la cual precisamente fue condenado, reviviendo la valoración y su grado de afectación Estado dispone para el recluso. Circunstancia que incluso eventualmente podría afectar garantías fundamentales, como quiera que los jueces al tomar la decisión de otorgar o no el beneficio, nuevamente fallan con base en una conducta por la cual el solicitante ya fue condenado.*

*De igual manera, uno de los motivos por los cuales se niegan las solicitudes, es por no cumplirse el total de requisitos exigidos para acceder a ellos, lo que evidencia la falta conocimiento del tema por parte de los reclusos. Así mismo, es usual que se nieguen los beneficios aduciendo falta de tratamiento penitenciario pese a cumplir con todos los requisitos objetivos exigidos para acceder a ello. En el presente apartado, la investigación nos conduce a reflexionar sobre los aspectos subjetivos que la norma establece para el otorgamiento de los beneficios, que podrían aparentemente erigirse como una barrera edificada sobre la irresponsabilidad estatal en la divulgación de los beneficios, pero lo más grave, en la carencia de una política criminal que articule claras estrategias de resocialización y prevención del delito, pensada desde la óptica del respecto de la dignidad de la persona humana.”*

Ahora bien, respecto a la reincidencia, se hace necesario traer a colación un reportaje publicado en Caracol Radio, el 23 de febrero de 2017, en el que informó lo siguiente:

*“Un estudio realizado por* ***el Departamento de Planeación Nacional****logró establecer que el 15.5% de las personas que han ingresado al sistema penitenciario son reincidentes.*

*En el****país hay un total de 120.668 personas privadas de la libertad****de las cuales el 66.3% son condenadas y un 33.6% son sindicadas.*

*El informe conocido por****Caracol Radio****señala que, actualmente, se calculan en****18.263 internos que son reincidentes****en el sistema penitenciario.****Estos le cuestan al Estado, aproximadamente, $ 292.409 millones al año.***

*El 15.5% de los reclusos en Colombia son reincidentes por algún delito.*

*En el país hay cerca de 120.668 personas privadas de la libertad.*

*Son cerca de 9.000 mujeres que han perdido su libertad.*

|  |
| --- |
| *El número de reincidentes es de 18.263* |
| *El costo de los reincidentes para el estado es de $292.409 millones. En Colombia hay 138 cárceles* |
| *El 30 % de los reclusos consumen embriagantes y alucinógenos. De esta cifra un 30% consume marihuana, 31.9% cualquier sustancia, 44.8% tabaco y un 20.7% alcohol.* |

*Se estima que****el 30% de los reclusos consumen estupefacientes****. Estudios demuestran que el****consumo de drogas aumenta la probabilidad de reincidencia en un 58%****.*

*De este porcentaje el 30% consumen marihuana, un 31.9% cualquier sustancia, 44.8% tabaco y un 20.7% alcohol.*

*El estudio realizado por****Planeación Nacional****asegura que las****probabilidades de una reincidencia de un interno en Colombia son altas debido al mercado de las drogas****y el hacinamiento se ha identificado un****déficit de oferta de programas de resocialización del 81%****y algunas debilidades Institucionales para acceder a ellos.*

*En el 2016, las incautaciones de droga en las cárceles del país superaron los $7.000 millones y****puede llegar a representar el 0.02% del PIB****.*

*En el periodo enero-octubre se incautaron más de 356.000 gramos de marihuana, 8.530 gramos de bazuco y 84.240 gramos de cocaína.*

*Para Planeación, si bien en 2017 el Inpec aumentará el presupuesto de resocialización al 37%, la****inversión sigue siendo insuficiente****. Sólo 5% se destinará a programas de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas.*

*Entre las recomendaciones que se plantean para superar esta problemática, se encuentran: evaluación de los programas de resocialización, fortalecimiento institucional, utilizar los sistemas de información y estrategias de big-data para definir una metodología para la medición de reincidentes con variables que superen el reingreso carcelario, y así generar herramientas de toma de decisión en****política criminal****.”*

1. **DE LAS COLONIAS AGRICOLAS**

El artículo 20 de la Ley 65 de 1993, por medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario en Colombia, hace referencia a la clasificación de posibles tipos de centros de reclusión en Colombia. Entre estos, el artículo 28 hace referencia a las Colonias Agrícolas, el cual señala:

**“Artículo 28.** **Colonias Agrícolas**. Son establecimientos para purgar la pena, preferencialmente para condenados de extracción campesina o para propiciar la enseñanza agropecuaria.

Cuando la extensión de las tierras lo permita podrán crearse en ellas constelaciones agrícolas, conformadas por varias unidades o campamentos, con organización especial.

***PARÁGRAFO.****<Parágrafo adicionado por el artículo*[*20*](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1709_2014.html#20)*de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La producción de estas colonias servirá de fuente de abastecimiento. En los casos en los que existan excedentes de producción, estos podrán ser comercializados. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que correspondan al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad Administrativo de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.*

El objetivo de las Colonias Agrícolas “es salirse de ese modelo estándar de centros carcelarios para poner a una población que en principio debe tener algún tipo de arraigo cultural, en lo que tiene que ver con lo agrícola; ***para que no paguen sus penas encerrados en una prisión, sino que lo hagan trabajando en el campo[[1]](#footnote-1)”.***

El objeto principal de estos centros, es preparar a las personas privadas de la libertad convenientemente para el trabajo libre, fomentando su readaptación a la vida social, despertándoles el entusiasmo para emprender una vida de moralidad y corrección, sea por su extracción del campo, sea por su vocación de trabajo en el campo o por sus capacidades.

En este sentido, la Corte ha dicho: *“(…) Este tipo de centros de reclusión cumple con una tarea resocializadora de alto significado. Se pretende, en lo posible, que ciertos infractores de la ley- usualmente de origen campesino-, cumplan en primer lugar, con el castigo impuesto por los jueces de la Republica de manera útil, pero al mismo tiempo, sigan vinculados al ambiente cultural y social en el que se desenvuelven*”

No obstante, lo anterior, se busca beneficiar no solo los condenados que tengan extracción campesina sino también los del área urbana quienes por no haber nacido en provincia pierdan la oportunidad de conocer las actividades agrícolas y pierdan la oportunidad de obtener ingresos personales y en su hogar mediante el trabajo de la tierra y no se les dé la oportunidad de descubrir su posible vocación en la vida.

**En Colombia existen una Colonia Agrícola, una en el municipio de Acacias en el Departamento del Meta, con una** extensión de 4.771 hectáreas y el 89 % de estas son reserva forestal. Los 1.242 internos están divididos en siete campamentos que ocupan el 11 % del terreno. Es la única cárcel del país en la que los presos pueden trabajar al aire libre en 13 proyectos productivos, es considerada una de las mejores cárceles de Colombia, cada preso que llega a la Colonia debe pasar primero por un proceso de rehabilitación en un patio ordinario, al cumplir esta fase, los internos pueden trabajar en oficios como avicultura, pesca, porcicultura, ebanistería, panadería, sastrería, entre otros**.** La mayoría de los productos fabricados se consumen en la cárcel y los demás se venden en Acacías**; los internos** son preparados previamente por el SENA en las diferentes modalidades, recibiendo cursos de capacitación técnica con una duración de tres meses de clase que se dictan y reciben al interior de la misma Colonia, donde acuden los instructores de dicha institución de enseñanza, a los internos que trabajan en cualquiera de los proyectos productivos se le otorga una bonificación de $2.000.oo a $3.000.oo pesos diarios, que se le pagan cada tres meses. Sin embargo, la principal retribución, no es la patrimonial, sino la lucha por la humanización del trabajo en condiciones dignas para lograr la resocialización junto con las redenciones de pena por trabajo.

Actualmente hay un proyecto para implementar una colonia agrícola en Yarumal, en el Departamento de Antioquia, en la que se pretende **albergar un gran número de reclusos de otras cárceles, y no condenados nuevos.**

A las Colonias Agrícolas, se destinan los condenados que merecieran un régimen de menor severidad, y exclusivamente para condenados del sexo masculino. El régimen de menor severidad al que se hace mención, es el establecido por la Ley 105 de 1922, los cuales son: los condenados que hayan cumplido en la Penitenciaria no menos de la mitad de la pena; siempre que hubieren observado conducta ejemplar o muy buena, y que la pena restante no exceda de cinco años, igualmente los condenados a la pena de prisión o de arresto por un tiempo menor de dos años. Pero en la actualidad, los delitos que pagan la mayoría de los internos, en Acacias son: “inasistencia alimentaria, hurto, lesiones personales y Ley 30 (porte de estupefacientes), claro está, que la pena no sea mayor a cinco años”. Sin embargo, desde 1999 al 2004, se cambió la exclusividad establecida para los hombres, por haber sido incluida la mujer en varios centros carcelarios, debido al contraste que sufría el país con el poco número de centros de reclusión para mujeres.

Por lo expuesto, consideramos necesario ampliar el número de personas que se beneficien en establecimientos con este carácter de resocialización, incluyendo a las personas privadas de la libertad por sentencia condenatoria por delitos culposos, preterintencionales o con penas catalogadas como leves dependiendo su naturaleza y duración, dentro de los cuales están inmersos la inasistencia alimentaria, hurto, lesiones personales y porte de estupefacientes, toda vez que el modelo de las fábricas penitenciarias y las penitenciarías agropecuarias estarían **destinadas a ser más un alivio para el hacinamiento y para una efectiva resocialización de los condenados.**

1. **DE LAS FABRICAS PENITENCIARIAS Y LAS PENITENCIARÍAS AGRICOLAS**

El proyecto busca crear las fabricas penitenciarias mediante la implementación de alianzas público privadas, para garantizar la continuidad y producción de las mismas, proporcionando condiciones favorables para la futura reinserción social del interno a la sociedad con la participación y ayuda de la comunidad y de las instituciones sociales y comerciales, en las mejores condiciones posibles y con el debido respeto de los intereses de las víctimas. Existiendo condiciones que permitan a los internos obtener competencias laborales que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les permitan resarcir económicamente a sus víctimas, contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio, de acuerdo con las capacidades de los programas institucionales diseñados. El Gobierno Nacional reglamentará todo lo atinente a la implementación de la presente Ley.

En un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas en Drogas y Crimen, Roadmap for the

Development of Prison-based Rehabilitation Programmes, se resaltó el carácter esencial del trabajo, la enseñanza y la educación como métodos de reducción de reincidencia en la población privada de la libertad: “Darles a los presos oportunidades para aprender nuevas habilidades y desarrollar experiencia laboral les ayudará a mantenerse alejados del crimen cuando salen de prisión, contribuyendo así a la misión general de la administración penitenciaria de aportar a la seguridad pública. Como se ha mencionado más arriba, Existe un buen cuerpo de investigación que muestra que en muchos países, (i) los reclusos tienen bajos niveles de educación y habilidades básicas; y que (ii) mejorar estas habilidades puede tener un impacto positivo en la reincidencia, la reintegración social y los resultados laborales. Por lo tanto, los programas de rehabilitación basados en la prisión ayudan a que las comunidades sean más seguras y reducen los niveles de dependencia de los ex presos.”

De igual manera en el caso de las colonias agrícolas, se han dado reportes por parte el Ministerio de Justicia en el 2015, sobre como las más bajas tasas de reincidencia se reportan en lugares donde se realizan proyectos productivos: “Con 350 cerdos y 160 vacas de la mejor calidad, además de proyectos como la ebanistería, la lombricompostaje y la panadería, entre otros, las autoridades del Inpec están cambiando la mentalidad de cientos de personas privadas de la libertad, que incluso, por provenir de grandes ciudades como Bogotá, no tienen ningún interés en el campo. Aunque el 50 por ciento de las personas que ingresan son reincidentes que han pagado dos y tres condenas, los que deciden seguir en la delincuencia después de pasar por la colonia o la penitenciaría de Acacías están por debajo del dos por ciento.”

1. **ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS**

La Corte Constitucional concluye que “el Sistema Carcelario actual no dispone de parámetros comunes y claros sobre los programas de resocialización, como consecuencia del aban­dono que ha tenido la reinserción social de quien ha cometido un deli­to, en la Política Criminal” (Sentencia T-762 de 2015).

Al analizar el informe del Alto Co­misionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2001, p. 79), en el que se establece que el sistema penitenciario colombiano no cumple con el fin resocializador, en la medida que existen altos ín­dices de reincidencia y altos niveles de violencia carcelaria, así como drogadicción y proliferación de bandas criminales en el interior de los muros, lo que a su vez propicia y favorece la corrupción y la victimi­zación de la población recluida. Varios de estos aspectos permanecen estables, como se expone en el informe del Ministerio de Justicia y del Derecho (2014, p. 77).

Adicionalmente, el documento CONPES 3828 (2015, p. 8) reitera que la infraestructura es insuficiente para la implementación del programa de resocialización y que esto no es un problema reciente sino de varios años atrás. Esto no es novedoso si se analiza en retrospectiva la Senten­cia T-153 de 1998 y el informe de la ONU anteriormente relacionado. A su vez, el mismo documento (CONPES 3828, 2015, p. 46), con base en el informe del Ministerio de Justicia y del Derecho (2014) señala las si­guientes falencias:

* Las actividades de tratamiento penitenciario para la resocialización no tienen enfoque productivo y competitivo.
* Se cuenta con escasa participación privada.
* Existen debilidades en la articulación del modelo educativo para la po­blación privada de la libertad con las políticas de educación nacional.
* Hay una capacidad limitada para la implementación del modelo educa­tivo para la población privada de la libertad.
* Existe una baja interacción con los ámbitos familiar, comunitario y so­cial en los programas de atención social y tratamiento penitenciario.
* Se presentan debilidades en los procesos de evaluación y tratamiento a la población privada de la libertad.

Tanto el informe del Ministerio de Justicia y del Derecho (2014, p. 79) como el documento CONPES y la Sentencia T-762, estos últimos de 2015, muestran un panorama desfavorable en materia de resocialización en el interior de los establecimientos de reclusión del país, poniendo en jaque el cumplimiento de esta función, ante la ausencia de una infraes­tructura apta para la consecución de este fin, la carencia de personal capacitado para el desarrollo de los programas y la poca efectividad de los mismos.

1. **DE LOS PROGRAMAS LABORALES, CONTRATOS DE TRABAJO LA REMUNERACIÓN DE LOS RECLUSOS**

La Corte Constitucional, en la Sentencia C -394 del 7 de septiembre de 1995 manifiesta que los artículos 84 y 85 de la ley 65 de 1993, que se refieren a **PROGRAMAS LABORALES Y CONTRATOS DE TRABAJO** y **REMUNERACIÓN DEL TRABAJO, AMBIENTE ADECUADO Y ORGANIZACIÓN EN GRUPOS** respectivamente, *“son normas destinadas a garantizar e incentivar la labor productiva dentro de los establecimientos carcelarios, en beneficio de los propios reclusos. Son normas que, además, tienen en cuenta las garantías mínimas que la Constitución Política consagra para el trabajo, naturalmente no en toda la extensión prevista en el artículo 53 superior, por cuanto, como es obvio, para estos efectos debe tenerse en cuenta la especial situación en que se encuentran los detenidos. En manera alguna puede pretenderse que dentro de un establecimiento carcelario tenga plena vigencia el régimen laboral que rige para el común de los trabajadores; sería inconcebible, por ejemplo, para los reclusos el que se garantizara el derecho a constituir sindicatos o asociaciones (Art. 39 C.P.) o el derecho a salir de vacaciones.*

*Sin embargo, en el caso concreto de los contratos de trabajo, advierte la Corte que en principio el trabajo realizado por los internos, en los términos de los artículos 84 y 86, consiste en una prestación de servicios de naturaleza civil, en el cual no existe propiamente relación de subordinación, más aún cuando no se configura un contrato de trabajo entre el interno y un patrono, ni seden, por ende, los elementos que tipifican dicho contrato  ya que, como lo establece claramente el artículo 84, los internos no pueden contratar directamente con particulares. En la eventualidad de que se configurara la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, habría lugar al pago de un salario proporcional equivalente al número de horas trabajadas, con base en el salario mínimo legal vigente. Por lo demás, en los casos en que un recluso trabajare al servicio de otro bajo alguna de las modalidades permitidas legal o reglamentariamente, dicha relación deberá regirse por las normas laborales vigentes”.*

Por todo lo anterior, es necesario que en Colombia se generen soluciones que no solo promuevan la resocialización de los reclusos y se mejoren las condiciones de hacinamiento, si no que fomenten la sostenibilidad del sistema.

**REFERENCIAS**

1. Acosta, D. (1996). *Sistema integral de Tratamiento Progresivo Penitenciario. Re­flexión en torno a la construcción de un modelo de atención a internos*. Bogotá: INPEC.
2. Aguilera Peña, M. (Abril de 2002). Las Penas de Muerte, Vengüenza pública, confinamiento, pérdida de derechos. Revista Credencial Historia. Recuperado el 16 de julio de 2016, de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2002/laspenas.htm>
3. Guillamondegui, L. (2010). *Resocialización y semilibertad*. Buenos Aires: Edito­rial B de F.
4. Lamo Jiménez Gloria Isabel. 2016. Observaciones a las disposiciones del sistema progresivo que regulan el tratamiento penitenciario de las persona privadas de la libertad en Colombia. Monografia.
5. Muñoz Conde, F. (1982). La resocialización del delincuente: Análisis y crítica de un mito. S. Mir (Ed.), *Política criminal y reforma del derecho penal* (pp. 131- 154). Bogotá: Temis.
6. Revista de derecho, universidad del norte, 49: 1-41, 2018. ISSN: 0121-8697 (impreso) • ISSN: 2145-9355 (*on line*). El fracaso de la resocialización en Colombia. Autor: Norberto Hernández Jiménez.
7. Sentencia No. C -394 del 7 de septiembre de 1995
8. Uribe Barrera Juan Pablo. 2012. Rebaja de pena por vía de redención: ¿derecho o beneficio? Comentario a la sentencia 35.767 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del seis (06) de junio de dos mil doce (2012), M.P. José Leónidas Bustos Martínez - Juan Pablo Uribe Barrera. Revista Nuevo Foro Penal No. 79, julio-diciembre 2012, Universidad EAFIT de [file:///C:/Users/angelica.vargas/Downloads/1913-Texto%20del%20art%C3%ADculo-6556-1-10-20130409%20(1).pdf](file:///C:\Users\angelica.vargas\Downloads\1913-Texto%20del%20art%C3%ADculo-6556-1-10-20130409%20(1).pdf).
9. Zuñiga Cordoba Oscar Huber. Efectividad de los Beneficios Administrativos y Judiciales en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Neiva entre los años 2012 a 2014, Revista jurídica Piélagus Vol. 14, No. 1 pp. 147-162. Enero a Diciembre de 2015. Revista Jurídica Piélagus, Vol. 14, N° 1, pp. 147-162
10. Noticia Caracol Radio. El 15.5% de los presos en Colombia son reincidentes: Planeación Nacional.<https://caracol.com.co/radio/2017/02/23/nacional/1487869102_751842.html>

De los Honorables Representantes

**MARGARITA MARIA RESTREPO JULIO CESAR TRIANA QUINTERO**

**Representante a la Cámara Representante a la Cámara**

**Departamento de Antioquia Departamento del Huila**

**JOSE ELIECER SALAZAR LÓPEZ DAVID ERNESTO PULIDO NOVOA**

**Representante a la Cámara Representante a la Cámara**

**Departamento del Cesar Departamento del Guaviare**

1. Cristian Leonel Guardia, Coordinador del Programa de Derecho en las sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia. [↑](#footnote-ref-1)